

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL****JUZGADO DIECIOCHO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTÁ D.C.**

RADICACION: *1100140880182021010600*
ACCIONANTE: *ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR*
ACCIONADO: *FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.*
DECIDE: *TUTELA*
CIUDAD Y FECHA: *BOGOTA D.C., JUNIO CINCO (5) DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)*

OBJETO A DECIDIR

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela impetrada por la señora **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR**, contra la empresa **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, petición e información.

1. ANTECEDENTES PROCESALES**1.1. Hechos jurídicamente relevantes.**

La señora **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR** en la demanda de tutela relató que el día 12 de abril de 2021 vía correo electrónico elevó derecho de petición ante la empresa **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, mediante el cual solicito el pago de sus acreencias laborales, así como la entrega de la documentación correspondiente a la relación laboral que sostuvo con la sociedad demandada; sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción de amparo la accionada no le ha suministrado respuesta alguna a su solicitud, pese a que han transcurrido más de treinta días hábiles desde la radicación del petitum.

Posteriormente, esto es, el día 4 de junio hogaño la accionante allegó a la acción constitucional escrito a través del cual informó que recibió una réplica de parte del representante legal de **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.** Sin embargo, afirmó que la sociedad accionada falta a su deber de informar la verdad y de obrar de buena fe, vulnerando su derecho fundamental de información al no suministrar una respuesta congruente y de fondo en relación con lo solicitado. Además, expuso que la respuesta de la accionada puede inducir en error al juez de conocimiento y de contera provocar una sentencia contraria a la realidad de los hechos, por ende, en aras de desvirtuar las afirmaciones de la sociedad accionada allegó el contrato de trabajo suscrito

entre la demandada y aquella, certificación laboral de fecha 14/12/2020, extracto de cotizaciones al sistema pensional y soportes de pago de nómina.

En virtud de lo anterior, consideró que con la actuación de la demandada se le están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, petición e información, en consecuencia, solicitó que en sede de tutela se ordene a la accionada dar respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la petición radicada electrónicamente el día 12 de abril de 2021.

Mediante auto del pasado 1 de junio, se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y se ordenó enterar a la accionada **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, de los hechos narrados por la demandante, para que ejerciera su derecho a la defensa y contradicción.

1.2. Respuesta de la accionada FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.

En respuesta allegada al Juzgado vía correo electrónico la sociedad accionada **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, a través del señor **CONSTANTINO JAVIER PORTILLA JAIMES**, en su calidad de representante legal, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, como quiera que manifestó envió al correo personal de la accionante la respuesta al derecho de petición impetrado por aquella, para lo cual adjuntó a su réplica copia de la contestación ofrecida a la actora.

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. -

2.1. Competencia.

El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, desarrollado por los numerales 1 de los Decretos 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, casi al unísono prevén:

"ARTÍCULO 1. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifícase el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales."

En consecuencia, este juzgado es competente para tramitar y resolver la demanda de tutela de la referencia, por cuanto la misma se dirige en contra de **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, sociedad de carácter privado.

2.2. Procedencia de la Acción de Tutela.

En atención al episodio fáctico narrado por el libelo, corresponde a este Despacho determinar si en el asunto planteado por la demandante se configura una vulneración o amenaza a los derechos fundamentales a la igualdad, petición e información, ante la falta de respuesta de fondo a la solicitud impetrada por la actora. Para ello, se analizará el caso en el marco de lo previsto por la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos jurisprudenciales sobre el tema.

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, es un mecanismo de carácter residual, subsidiario y cautelar, que se ejerce para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o vulnerados.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando existan otros medios de defensa judiciales para la protección de los derechos que se invocan, salvo que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-157 de 2010, realizó un recuento de la posición sentada por la corporación respecto del carácter subsidiario y residual de la acción de tutela:

"Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta. En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales."

2.3. Del derecho de petición.

La Constitución Política de 1991 en el artículo 23, consagra el derecho de petición y lo define como: *"El derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales"*

Según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, la **pronta** y **oportuna** resolución de la reclamación que se formula ante la autoridad pública hace parte del núcleo esencial del derecho de petición. Además, la respuesta tiene que **comprender** y **resolver de fondo** lo pedido y ser **comunicada** al peticionario, pues de obviedad es entender que el derecho fundamental mencionado comporta para este último la posibilidad de conocer

la respuesta de la entidad ante la cual se cursó la solicitud, una vez transcurrido el término establecido en la ley.

Sobre el particular, esa Corporación en Sentencia T-146 del 11 de marzo del 2012, luego de abordar el estudio de la línea jurisprudencial, estableció lo siguiente:

*"(...) el ejercicio de derecho de petición comienza con la posibilidad de dirigirse respetuosamente a las autoridades, tal y como lo señala el **primer enunciado normativo** del artículo 23 cuando señala que **'Todo (sic) persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general (...).'***

*Esta solicitud desencadena la actuación correspondiente, esto es, que dentro de un término razonable, se profiera una decisión de fondo, el cual constituye **un segundo elemento integrado** a la noción del derecho que el artículo 23 superior recoge- **"y a obtener pronta resolución"**-.*

*Además, **como tercer enunciado**, encontramos el segundo párrafo de la disposición constitucional que señala que la ley "podrá reglamentar su ejercicio ante organización privadas para garantizar los derechos fundamentales". Es decir, la reglamentación de estos tres elementos identifican e individualizan el derecho fundamental." (En negrilla en el texto original)*

Por otra parte, como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, esta Corporación sintetizó las reglas para su protección, en los siguientes términos:

"a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. (Se subraya)

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

*g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto **y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación.** Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será*

ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes". (Subrayado y Negrilla del Despacho).

Así mismo, el artículo 14^o del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo¹ se encarga de regular el procedimiento y los plazos para garantizar el derecho de petición en sus diferentes modalidades, para lo cual preceptúa:

ARTÍCULO 14. PLAZO PARA DECIDIR. *Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.*

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregaran dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del termino señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Ahora bien, conforme a la ley 1755 de 2015, en su artículo 32, respecto de las peticiones realizadas a organizaciones privadas, se dice lo siguiente:

"Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.

Parágrafo 1^o. *Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario".*

No obstante, en virtud del artículo 5 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional amplió transitoriamente los términos para atender peticiones por parte de entidades públicas, en tanto que la Corte Constitucional al ejercer control automático de dicha norma, la declaró condicionalmente exequible, bajo el entendido que también es aplicable a los particulares, la cual reza del siguiente tenor:

"Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

¹ Sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo. En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales."

Teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales procederá esta Juez Constitucional a determinar si hubo una afectación a los derechos fundamentales de petición e información de la señora **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR**.

2.4. Caso Concreto.

En atención a los supuestos de hecho narrados en el libelo de tutela, corresponde a este Despacho determinar si la sociedad demandada vulneró los derechos fundamentales de petición e información de la ciudadana **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR**.

De los elementos materiales probatorios allegados al trámite constitucional, se verificó que, en efecto, el día 12 de abril de 2021 la ciudadana **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR**, elevó derecho de petición ante la empresa **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, mediante el cual solicito el pago de sus acreencias laborales, así como la entrega de la documentación correspondiente a la relación laboral que sostuvo con la sociedad demandada, el cual manifiesta la accionante no había sido resuelto a la fecha de interposición de la acción de amparo.

Por su parte, la sociedad accionada **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, durante el trámite de la acción constitucional, solicitó se declare la carencia actual de objeto de la acción constitucional ante la existencia de un hecho superado, habida cuenta que afirmó envió respuesta a la solicitud impetrada por la actora, para lo cual adjuntó a su replica copia de la contestación ofrecida a la petente.

En ese orden de ideas, en principio, podría entenderse que el derecho de petición cuya protección demanda la accionante se encuentra satisfecho, en los términos indicados por la entidad accionada; sin embargo, es menester advertir que el derecho de petición se mantiene incólume cuando la autoridad o el particular contra quien se dirige la solicitud no la resuelve en el término oportuno, o no soluciona lo requerido de fondo y en forma clara, congruente y precisa, llegando lo verificado al conocimiento del solicitante a través de la comunicación oportuna de la respuesta, solo con el lleno de estos requisitos podrá entenderse que el derecho de petición se encuentra satisfecho, los cuáles serán objeto de valoración en el presente asunto.

Previo a ello, es menester precisar que las entidades públicas y los particulares, estos últimos en los casos señalados expresamente por la ley, están en la obligación constitucional y legal de suministrar una respuesta de fondo a las peticiones que les sean dirigidas, es decir, que atienda cada uno de los interrogantes planteados, indistintamente que lo resuelto favorezca los intereses del peticionario, y que, en todo caso, debe ser notificada en debida forma al solicitante.

Al respecto, se tiene que la señora **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR** en ejercicio del derecho de petición elevó solicitud ante la empresa **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, tendiente a obtener la cancelación de sus acreencias laborales y la entrega de diferente documentación atinente a la relación laboral que sostuvo con la demandada; no obstante, se avizora que pese a que la accionada en la contestación ofrecida al Juzgado informó que brindó respuesta a la solicitud impetrada por la actora, lo cierto es que del estudio de la misma se advierte que dicha réplica, no resuelve de fondo y de manera congruente la petición impetrada por la señora **ALZATE ESCOBAR**.

Y ello es así, pues analizado el contenido de la respuesta que se emitió por parte de la accionada **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, cuyo texto se transcribió y se halla adjunto a la réplica que ofreció la demandada a este Estrado Judicial, se evidencia que no es una respuesta clara, congruente y de fondo, en tanto no guarda relación con lo pretendido por la parte actora y de contera no resuelve lo planteado por la accionante, pues en la misma no se analizó la petición esbozada en el petitorio.

Aunado a lo anterior, advierte esta Judicatura que si bien la accionada en la respuesta ofrecida a la petente señaló que no ha existido ninguna relación laboral entre aquella y la sociedad accionada, situación que considera releva a la empresa de obligación alguna con ésta, también lo es que la señora **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR**, allegó al expediente de tutela copia del contrato de trabajo a término indefinido que suscribió el 1 de agosto de 2020 con **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, luego entonces contrario sensu a lo esbozado por el representante legal de la demandada, esa entidad está en el deber legal de dar respuesta de fondo, concreta y congruente a cada uno de los ítems relacionados en la petición impetrada el día 12 de abril hogaño por la actora.

Bajo ese derrotero, advierte esta Judicatura que la solicitante no ha obtenido aún una respuesta a su petitem, de manera que dable es concluir que la solicitud presentada por la accionante persiste indemne, esto es, sin respuesta, situación que se constituye en vulneradora de los derechos fundamentales de petición e información de la señora **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR**.

Las razones expuestas en precedencia se consideran suficientes para que el Juzgado encuentre fundada la pretensión de la accionante en el sentido de acreditarse claramente la vulneración de sus derechos fundamentales de petición e información, los cuales serán objeto de amparo, en consecuencia, se ordenará a la sociedad accionada **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.** que, a

través de su representante legal o de quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, resuelva de fondo la petición presentada por la señora **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR** el día 12 de abril de 2021, **en el sentido de entrar a resolver de manera clara, específica y sin evasivas cada uno de los puntos en ella consignados, así como de comunicar la respuesta de manera oportuna y en debida forma a la peticionaria, so pena de incurrir en desacato.**

Lo anterior no obsta para recomendar a la entidad accionada que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en conductas que como en el presente caso se constituyan en vulneradoras de derechos fundamentales.

Finalmente, en relación con el derecho fundamental a la igualdad, invocado por la actora, basta señalar que no se acreditó durante el curso del trámite tutelar que la accionada haya incurrido en conductas atentatorias en contra de este, razón por la cual se denegará su amparo.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DIECIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición e información, invocados por la señora **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR**.

SEGUNDO: En consecuencia, **ORDENAR** a la accionada **FULLER MANTENIMIENTO S.A.S.**, a través de su Representante Legal y/o de quien haga sus veces que, si aún no lo ha hecho, en el término improrrogable **de cuarenta y ocho (48) horas** contadas a partir de la notificación de la presente providencia, resuelva de fondo la petición presentada por la señora **ELIANA ALEJANDRA ALZATE ESCOBAR**, en los términos expuestos en la parte motiva de la decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en los términos señalados en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no impugnarse el presente fallo, al día siguiente del vencimiento del término para ello, **REMITIR** la actuación original de este expediente de tutela a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión (Inciso 2º art. 31, Decreto 2591 de 1991).

Contra esta decisión procede el recurso de impugnación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

LILIANA PATRICIA BERNAL MORENO

Firmado Por:

LILIANA PATRICIA BERNAL MORENO

JUEZ

**JUEZ - PENAL 018 CONTROL DE GARANTIAS DE LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**2abc4017168f08bed4fe542cfe0325cdd53d2ec476c8ef59aeaa3c86c2f1
e179**

Documento generado en 08/06/2021 09:13:39 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**